



## **COMUNICADO 5**

JUNIO 8, 2021.

### **FRENTE A LA SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y EL MOVIMIENTO DE LOS JÓVENES POR LOS DERECHOS Y LOS ACUERDOS DE PAZ**

Era de esperarse lo que ha ocurrido en Colombia en 2021. Se rebosó la copa. Tanto, que ya no importa el contagio en la pandemia. Este gobierno tacó y descachó. Creyó que con el virus y la lentitud en la vacunación nadie saldría a marchar y a reclamar los derechos por la vida y mejores oportunidades, en educación y en el trabajo. La copa se llenó con las trizas a los acuerdos de paz, con los nombramientos del fiscal, la procuradora, el contralor, el delegado para la paz y el defensor del pueblo, todos amigos entre sí y de la misma escuela ideológica: neutralizadores de la independencia de los poderes en la democracia representativa.

Se rebosó la copa con las masacres y la indolencia de estos personajes, de su presidente y de su jefe. Se rebosó porque la corrupción se agudizó, el despilfarro y la repartición entre los suyos se intensificó, los narcotraficantes y los paramilitares se fortalecieron, los banqueros prosiguieron con la acumulación desmedida de capital y las componendas de los congresistas continuaron. Se rebosó la copa con el tratamiento discriminatorio y despectivo a las comunidades campesinas, indígenas y negras y la indiferencia hacia miles de jóvenes y niños dedicados a esculcar en las basuras en lugar de participar en procesos educativos y en la construcción paulatina de sus proyectos existenciales.

La reforma tributaria pretendía descargar en las clases medias el déficit fiscal, cuando el empobrecimiento ha cubierto también a índices altos de este sector social; sin

pudor alguno quisieron poner impuesto de valor agregado (IVA) incluso a los trámites funerarios, en plena pandemia. La reforma a la salud buscaba consolidar los negocios que han imperado desde que se aprobara la ley 100. La tercerización de los recursos públicos se fue naturalizando, de tal modo que las porciones que toman los terceros constituyen recortes importantes a la inversión pública, pero son los favores para quienes acarrear los votos en cada campaña.

En educación se develaron las fisuras del sistema, las que han existido siempre: pocos libros en las casas, debilidad en la conectividad de internet, carencia de los computadores con los aditamentos para la educación remota, improvisación con guías desactualizadas respecto a lo que se invoca en los lineamientos curriculares, acervos bibliográficos insuficientes e inexistentes en las escuelas (se requieren textos de divulgación científica, compilaciones en diversos géneros discursivos, materiales audiovisuales...). A esto se suma la masificación de las aulas, los rezagos educativos de los padres y las madres, la desarticulación entre los niveles y los grados, la carencia del ciclo de preescolar en el sector público y las respuestas compensatorias y remediales para los jóvenes de los grados 10 y 11, con el programa de articulación con el SENA. Es otro gobierno que no se comprometió con la transformación estructural y profunda del sistema, ni en la educación básica ni en la educación superior.

Los negociantes de la educación continuaron promoviendo el método que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junto con la Fundación Luker, Confa-Caja de Compensación Familiar de Caldas y el ministerio de educación, de manera irresponsable, avalan como una novedad en el aprendizaje inicial de la lectura y la escritura: "Aprendamos todos a leer: megalibro de cuentos para niños" (2018), material que recalca en el estereotipo de textos sin autor, textos forzados al sistema fonológico de la lengua (no es la historia narrada lo trascendente sino las palabras en las que se incorpora cada uno de los fonemas); tal forzamiento da lugar al carácter artificial y a la pobreza literaria del material, que en nada se relaciona con los lineamientos curriculares, que insisten en la importancia de los textos auténticos de diversos géneros y en el enfoque comunicativo.

Es grave que el ministerio y las secretarías de educación de algunos departamentos respalden metodologías sobre el aprendizaje inicial de la lectura y la escritura, sin considerar las investigaciones que desde el enfoque sociocultural, socio-constructivista y comunicativo se han adelantado en las universidades y en muchas escuelas públicas del país, en la perspectiva del aprendizaje temprano de la lectura crítica. Un funcionario con principios éticos debería preguntar por las investigaciones que respaldan los productos que ofrecen los comerciantes de la educación. América latina avanzó de manera significativa (desde 1979) en la fundamentación, surgida de las investigaciones, de alternativas pedagógicas para la alfabetización con criterio de comunidad letrada (los trabajos de Ferreiro, Teberosky, Braslavsky, Tolchinsky, Lerner, Atorresi, Inostroza, de Oliveira, Vadori, Villegas, Rincón...); sin embargo, en la última década los seguidores de la psicología de la conducta y los negociantes de la educación buscan reposicionarse con el beneplácito de los ministerios alrededor de lo que da en llamarse neurociencias, como lo que pregona Stanislav Dehaene, quien descubrió que el agua moja.

Es también grave la confusión entre los docentes cuando contrastan documentos con enfoques loables del mismo ministerio, como las *Bases curriculares para la educación inicial y preescolar* (2017), y los surgidos del programa “Aprendamos todos a leer”. Cabe señalar al respecto que un documento sobre la actualización de los lineamientos curriculares, elaborado en 2014 por la Universidad de Antioquia, con la cooperación de la RedLenguaje, fue engavetado porque no sintonizaba con lo que un “grupo asesor” ya tenía previsto para los “derechos básicos de aprendizaje”, las “mallas de aprendizaje” y los libros de texto (los de SM), también documentos anacrónicos en sus enfoques. La legislación señala que le corresponde a las comunidades científicas asesorar desde sus trayectorias a las agencias gubernamentales, pero desde 2015 el ministerio de educación ha puesto al revés la relación: indicarle a la universidad contratada lo que conceptualmente tiene que hacer.

Una perspectiva democrática daría lugar a la circulación de los documentos para la política pública producidos entre las comunidades académicas y el ministerio según los convenios establecidos para tal fin; son recursos públicos los que el ministerio aplica para las asesorías y los productos tienen que ser objeto de deliberación y de determinación de manera colegiada para garantizar el compromiso con su aplicabilidad y sus desarrollos y así evitar el despilfarro, como seguir contratando en cada gobierno para “hacer estudios” sobre lo mismo; el ministerio tiene los documentos necesarios para proceder con la transformación del sistema.

La voz de los maestros es decisiva y son quienes junto con los investigadores han de proponer al ministerio estrategias para ajustar el sistema educativo, pues son múltiples las tesis de maestría en las que se abordan los problemas y las alternativas: se trata de reconocer la vía que va de la base hacia arriba y no al contrario. Por eso la Red de Lenguaje asume la democracia como una construcción continua que se fortalece desde el trabajo en las aulas con la participación abierta de los padres y madres de familia, los directivos y los gobernantes locales y, sobre todo, el trabajo en equipo entre los niños, los jóvenes y sus maestros.

Movimientos sociales como los transcurridos desde el mes de abril de 2021, liderados sobre todo por los jóvenes, son oportunos para realizar los balances sobre la situación del sistema educativo colombiano. Expresamos nuestra preocupación por el anquilosamiento de la educación, no solo debido a la pandemia sino al desdén y al desinterés de los gobiernos por acometer el reto de invertir en los recursos necesarios para el acoplamiento de la educación con las expectativas de los niños y de los jóvenes colombianos. No es posible seguir aplazando dicho compromiso, pues la fragilidad del sistema subyace en las demandas sociales y son las razones fundamentales del movimiento.

El problema no se resuelve con medidas transitorias como la “matrícula cero en la educación superior para los estratos 1, 2 y 3”; se trata más bien de asignar los presupuestos necesarios, como política de estado, para la ampliación de la cobertura

en las universidades, la fundación de institutos politécnicos y la articulación respectiva con un ciclo de educación media diversificada gobernado por los mismos colegios; el SENA debería concentrarse en lo que ha caracterizado su función, pertinente sin duda, desde que fuera fundada: la acreditación, actualización y cualificación de los oficios y las profesiones.

En todo caso las universidades con el 70% de la planta docente soportada en contratos semestrales y provisionales, es infuncional; es necesario deslindar la visión de universidades para pobres y para ricos en aras de la universidad policlasista; y la universidad pública y las privadas, con trayectorias en investigación, tienen que fundar sedes en los territorios de las periferias para representar al estado y evitar así que la única alternativa de los jóvenes sea la beligerancia armada. La educación es la práctica más poderosa para detener la violencia física y la guerra. Ojalá en 2022 haya una gran alianza política, con los sectores más progresistas, para reconstruir el país y se evite la segunda vuelta electoral, otro gasto innecesario.

**JUNTA NACIONAL DE LA RED COLOMBIANA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA FORMACIÓN DOCENTE EN LENGUAJE**